

CARTA PÚBLICA AL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)

Ciudad de México, a 29 de abril de 2024

Cristina Narbona Ruiz, presidenta.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, secretario general.

Hana Jalloul Muro, secretaria de política internacional y cooperación al desarrollo.

El Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) fue fundado en 1989 por universitarios y sindicalistas mexicanos con el propósito de contribuir, desde un espacio no partidista, a la democratización de México y a la equidad social.

Hacia el PSOE tenemos un amplio aprecio por el relevante papel que sus militantes y dirigentes han realizado en España para dejar atrás la dictadura franquista, edificar una democracia moderna, incorporar a su país a la Unión Europea y construir un Estado de bienestar digno de ese nombre. La obra del PSOE ha sido vista por nosotros como un ejemplo de política socialdemócrata.

Sin embargo, nos dirigimos a ustedes por el desconcierto que nos generaron las recientes declaraciones de la secretaria de política internacional, Hana Jalloul, en el sentido de que el PSOE respalda la candidatura de Claudia Sheinbaum, del partido Morena, lo que es “una forma de compartir la lucha contra el *lawfare* (acoso judicial) y defender la democracia y las instituciones, que están siendo amenazadas, tanto acá como allá, por fuerzas reaccionarias de la extrema derecha. Yo creo y espero que Sheinbaum ganará; lo tiene más o menos fácil gracias al inmenso trabajo que hay detrás del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para luchar contra la pobreza y la desigualdad” (*La Jornada*, 27 de abril 2024).

Nuestra extrañeza no es porque el PSOE hable de México. No nos inspira ningún chauvinismo, pues somos partidarios del internacionalismo, el diálogo, el debate y la cooperación política entre organizaciones de distintos países y entre las naciones mismas.

Pero lo cierto es que México sí vive tiempos de acoso a su democracia y a las instituciones que construyó la sociedad mexicana para dejar atrás el autoritarismo, pero ese ataque proviene del gobierno del presidente López Obrador.

Nos permitimos ofrecerles una breve recapitulación de hechos que no pueden ser ignorados y que, al ser conocidos, difícilmente permiten identificar a Morena como un partido con compromiso democrático o con vocación social.

México cuenta con instituciones imprescindibles para su vida democrática, como son las autoridades electorales autónomas e independientes al poder en turno y, como ocurre en toda democracia, con una necesaria división de poderes. El

presidente López Obrador ha intentado por varias vías dañar ese diseño constitucional. La ausencia de mayoría calificada en el Congreso –gracias al pluralismo de la sociedad mexicana que se refleja en el parlamento nacional– le impidió hacer cambios en la Constitución para anular a las autoridades electorales independientes (2022), y más adelante (2023) la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una reforma legal que afectaba al Instituto Nacional Electoral que ha garantizado la celebración de elecciones auténticas.

Ahora, en 2024, el presidente López Obrador propone un conjunto de reformas constitucionales que fue hecho suyo de inmediato y sin matiz alguno por la candidata a la presidencia de Morena, Claudia Sheinbaum, en el siguiente sentido:

- Acabar con los legisladores de representación proporcional en el Congreso, asfixiando la representación de las minorías políticas en México. Así, el partido más votado, aunque tenga menos de la mitad del sufragio de la ciudadanía, puede hacerse con pleno control del Parlamento. Mientras la izquierda democrática de México siempre luchó por la plena proporcionalidad en la representación parlamentaria, hoy el gobierno busca regresar al pasado autoritario.
- Elegir por voto popular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que los convertiría en alfiles del partido mayoritario.
- Con la misma intención proponen elegir por voto universal a los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hoy se nombran por el acuerdo de dos terceras partes del parlamento, lo que implica un amplio consenso en figuras de la confianza de las distintas fuerzas políticas.

De prosperar esas propuestas, México regresaría a un escenario de partido hegemónico y sujeción del Poder Legislativo al Presidente, sin independencia del Poder Judicial y sin autoridades electorales autónomas. Sería supeditar al poder presidencial el funcionamiento de los otros dos. Implicaría desandar los avances de la democratización para adentrarse en el autoritarismo. Nos sorprende que esa agenda de concentración del poder y lesión al pluralismo y equilibrio de poderes en México tenga el respaldo abierto y acrítico de un partido socialdemócrata como el PSOE.

En su adhesión al gobierno de México, ustedes no consideran que éste reivindica medidas que son contrarias a los derechos humanos, tal como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como es la prisión preventiva a través de la cual basta una denuncia de la autoridad para que la persona señalada sea sometida a prisión, violando la presunción de inocencia y dando lugar a un uso abusivo de la procuración de justicia.

El presidente López Obrador ha acusado y atacado una y otra vez al Poder Judicial y a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han decidido frenar algunas de las decisiones que el mandatario ha adoptado contraviniendo la Constitución. No hay acoso judicial al gobierno, al contrario, el presidente ataca la independencia del Poder Judicial y de los organismos autónomos que hacen

posible que México sea una democracia. El acoso del gobierno incluye a la prensa libre, a grado tal que el presidente ha llegado a exponer públicamente datos personales de una corresponsal extranjera por publicar una investigación periodística incómoda al poder.

Estimados amigos del PSOE: esos intentos de índole autoritaria han generado la movilización de cientos de miles de ciudadanos en México reivindicando las elecciones libres y un Poder Judicial independiente. Es falso que las críticas a López Obrador sean obra de la derecha: la izquierda democrática mexicana y organizaciones feministas, ambientalistas, de derechos humanos, de colectivos de personas desaparecidas por la violencia criminal, de científicos, una y otra vez han alertado del autoritarismo del actual gobierno. Y lo han hecho siempre de forma pacífica, legal y democrática. Estigmatizar la crítica y la protesta hacia los gobiernos no es propio de demócratas.

En materia social, México ha tenido un gobierno de enorme falta de responsabilidad y hasta de básica humanidad. Nuestro país tuvo uno de los peores desempeños durante la pandemia Covid-19 con 800 mil muertos, así como el mayor número de pérdida de vidas humanas entre el personal de salud. El gobierno mexicano se negó a realizar pruebas masivas para detectar y limitar la propagación del virus, incluso no ordenó el uso del cubrebocas y disminuyó la cobertura de servicios de salud a la población.

El número de mexicanos, según cifras oficiales, que dejó de tener acceso a la salud pasó de 20 a 50 millones de personas entre 2018 y 2022. Una exclusión de servicios públicos básicos cuando la gente más lo necesitaba.

En plena pandemia, en 2020, el gobierno mexicano diseñó y aprobó un presupuesto público para 2021 con superávit fiscal en vez de priorizar el respaldo a empresas, trabajadores y familias que padecían el colapso económico por la pandemia. No hubo apoyos, estímulos ni recursos para salvar negocios y empleos. La conducción económica del gobierno mexicano no puede sino catalogarse de un neoliberalismo tan extremo como insensible.

En los hechos, este gobierno ha favorecido la privatización de los servicios de salud: el sector público dejó de dar 4 millones de consultas médicas por año, y el porcentaje de consultas en el sector privado pasó de 50 a 63%.

Otro dato que es preciso conocer es que el financiamiento a la educación superior pública se contrajo en 35%.

La definición socialdemócrata de favorecer la equidad a través la provisión de más y mejores servicios públicos ha sido contravenida por el gobierno de López Obrador.

México vive una delicada crisis de seguridad pública, donde grupos criminales operan a sus anchas en buena parte del territorio nacional sometiendo a la población a la exacción y al terror constantes. El gobierno niega esa realidad con su

política de “abrazos y no balazos” a los criminales, abdicando de la responsabilidad de dar seguridad a la población y permitiendo, en los hechos, la privatización de la violencia en manos de los cárteles. A la vez, eso sí, el gobierno ha militarizado la seguridad pública y ha colocado al Ejército a cargo de la operación de aduanas, puertos, aeropuertos y de la construcción de obra pública sin supervisión ni control. Nos preocupa que en el PSOE no se haya analizado esta realidad, que incluso un espectador lejano puede ver, antes de respaldar a un gobierno de reflejos cada vez más militaristas y de sistemática condescendencia hacia el poder del crimen organizado.

Nos hemos extendido en esta misiva, pero consideraos que ustedes deben contar con el mayor número de hechos y datos ciertos, entre los cuales se encuentra la agenda de política internacional del actual gobierno de México. En plena invasión rusa a Ucrania, en septiembre de 2023, el presidente López Obrador invitó al ejército ruso a desfilar en el Zócalo de la Ciudad de México a propósito de nuestra fiesta nacional. También desfilaron representaciones militares de Nicaragua y Venezuela, naciones donde la democracia ha sido asfixiada por el autoritarismo. El gobierno de México, contrario a la noble historia de nuestro país que brindó asilo y acogida a los perseguidos por distintas dictaduras –la franquista, la estalinista, las de las juntas militares del Cono Sur– ahora tiende lazos de amistad con autocracias.

No creemos que el PSOE se pueda identificar con esos gestos hacia distintas dictaduras contemporáneas. Lo que hemos intentado con en esta carta es proporcionar elementos demostrables para un estudio sereno e informado de lo que ocurre en México.

Como Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) hemos publicado recientemente dos libros *Balance temprano. Desde la izquierda democrática* (2020) y *El daño está hecho. Balance y políticas para la reconstrucción* (2024) sobre lo que ha sido el actual gobierno de México. Se los hemos enviado y les manifestamos nuestra disposición para dialogar sobre la situación política y económica de México.

Reciban un amistoso saludo.

Junta de Gobierno

Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD)

Responsables de la publicación:

Ricardo Becerra (Presidente), Ciro Murayama y Luis Salazar.